

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

13

MADRID

SALA DE LO SOCIAL

Sección Tercera

EDICTO

En las actuaciones número 5.311 de 2009 seguidas ante la Sección Tercera de la Sala de lo social de este Tribunal Superior de Justicia, dimanantes de los autos número 880 de 2007 del Juzgado de lo social número 26 de Madrid, promovidos por “IDM Ingeniería de Edificaciones Modulares, Sociedad Limitada”, contra doña Iris Mercedes Romero Carreño, doña Cecilia Janet Changanqui Romero, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre materias de Seguridad Social, con fecha 30 de marzo de 2010 se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal siguiente:

Sentencia número 259 de 2010-AC

Ilustrísimos señores don Ramón Fernández Otero, presidente; doña Emilia Ruiz-Jarabo Quemada y don Miguel Moreiras Caballero.—En Madrid, a 30 de marzo de 2010.

Habiendo visto las presentes actuaciones la Sección Tercera de la Sala de lo social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los ilustrísimos señores citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución española, en nombre de Su Majestad el Rey y por la autoridad que el confiere el pueblo español, ha dictado la siguiente sentencia:

En el recurso de suplicación número 5.311 de 2009 formalizado por el letrado don Rafael Francisco Diéguez Pérez, en nombre y representación de “IDM Ingeniería de Edificaciones Modulares, Sociedad Limitada”, contra la sentencia de fecha 23 de marzo de 2009 dictada por el Juzgado de lo social número 26 de Madrid, en sus autos de demanda número 880 de 2007, seguidos a instancias de “Transportes Carlos Hernán, Sociedad Limitada”, e “IDM Ingeniería de Edificaciones Modulares, Sociedad Limitada”, frente a doña Iris Mercedes Romero Carreño, doña Cecilia Janet Changanqui Romero, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social, en reclamación por materias de Seguridad Social, siendo magistrado-ponente el ilustrísimo señor don José Ramón Fernández Otero, y deduciéndose de las actuaciones habidas lo siguiente.

Fallamos

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el letrado don Rafael Francisco Diéguez Pérez, en nombre y representación de “IDM Ingeniería de Edificaciones Modulares, Sociedad Limitada”, contra la sentencia de fecha 23 de marzo de 2009 dictada por el Juzgado de lo social número 26 de Madrid, en sus autos de demanda número 880 de 2007, seguidos a instancias de “Transportes Carlos Hernán, Sociedad Limitada”, e “IDM Ingeniería de Edificaciones Modulares, Sociedad Limitada”, frente a doña Iris Mercedes Romero Carreño, doña Cecilia Janet Changanqui Romero, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social, y en consecuencia, confirmamos íntegramente la sentencia dictada en la instancia.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal una vez haya adquirido firmeza la presente resolución.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al libro de sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Proce-

dimiento Laboral, que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo social dentro del improrrogable plazo de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con lo establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley. Asimismo, se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (artículos 227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el “Banco Español de Crédito”, sucursal de la calle Barquillo, número 49, de Madrid, oficina 1006, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo social al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de haber efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente número 2828/0000/00/5311/09 que esta Sección tiene abierta en el “Banco Español de Crédito”, sucursal número 1026, sita en la calle Miguel Ángel, número 17, de Madrid, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de este habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por esta su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202.1 y 202.3 de la citada Ley de 7 de abril de 1995, y siempre en atención a la parte dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales para su debida ejecución al Juzgado de lo social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los libros de esta Sección de Sala.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Se advierte a la parte en ignorado paradero que en lo sucesivo se le efectuarán las notificaciones en estrados, salvo que se trate de autos, sentencias o emplazamientos, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.

Y para que sirva de notificación y advertencia en forma a doña Iris Mercedes Romero Carreño, en ignorado paradero, se expide el presente en Madrid, a 5 de noviembre de 2010.—El secretario (firmado).

(03/43.555/10)